are not abstract or theoretical: they refer directly to the books under review, and seek to extract the value as well as identify the shortcomings of each of these monographs. Wood also adds an afterword to his articles to respond to reactions from the authors, express some regrets or concerns, and, mostly, to reiterate his points more forcefully.

Gordon Wood's central effort is to separate the craft of history from the blatant utilization of the field for any purpose other than a thorough understanding of the past. The fact that he does so while at the same time teaching how to engage the historiography, providing concrete examples on how to handle fundamental concepts in history, makes this volume all the more valuable.

IVÁN JAKSIĆ
Stanford University

JUAN CARLOS YÁÑEZ, *La Intervención Social en Chile, 1907-1932*. Santiago, Ril Editores, 2008, 334 páginas.

En este libro el autor propone un viaje, un recorrido, cuyo protagonista es el trabajador, quien transita desde su virtual anomia hacia su reconocimiento institucional como actor mayoritario y esencial para la república. En su peregrinar hacia ese *telos*, entra en diálogo con la oligarquía, a la cual presiona y frente a la cual se hace visible, con los intelectuales e ideólogos que piensan su situación en la *polis*, y con la institucionalidad del Estado que finalmente debe asignarle su lugar en ella. Es el sentido de su recorrido: narrar la evolución de la intervención social en Chile, entendida como "la acción desarrollada por el Estado en el contexto del conjunto de problemas que surgen hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que se conoce como la 'cuestión social'" (p. 17).

El recorrido se inicia con un momento institucional: la creación de la Oficina del Trabajo, en 1907, para terminar también con otro momento institucional: la creación del Ministerio del Trabajo, en 1925. Consciente de que un recorrido histórico no debe terminar abruptamente como si existiese el fin de la historia, un contundente capítulo final y unas conclusiones, que son una invitación a continuar esta línea de investigación, dejan abierta la obra a responder y formular nuevas preguntas a partir de ella. Por ejemplo cuando, en su conclusión, con modestia pide ayuda a los lectores para responder respecto de las razones de la pervivencia de los funcionarios del trabajo como pedagogos de la intervención social del Estado.

Esta reseña no se propone responder a la pregunta de Yáñez. Tan solo quiero comentar algunos aspectos de la obra. En primer lugar, lo ya mencionado, respecto de su estructura, a lo cual quisiera agregar su buena pluma, la vastedad y variedad de sus fuentes que van desde los documentos oficiales, a la prensa, los discursos parlamentarios, convenciones partidarias y la gran cantidad de bibliografía secundaria consultada. Aunque el autor conoce bien la literatura sobre las prácticas discursivas y su influencia en la conformación de las estructuras de poder, y de

hecho las usa, el libro no cae en el abuso al que a veces conduce convertir toda la historia en texto. Así, puede detectarse un hilo conductor de la narración que incluye el discurso y su evolución, así como las prácticas no discursivas, es decir, aquellas que se plasman en instituciones donde despliegan su acción los sujetos. Estas son las instituciones del Estado.

Desde esta perspectiva, el autor se inserta en una tradición de la historia política chilena que privilegia al Estado como el gran motor de cambio social y cultural en el país y como el termómetro que permite medir la temperatura que alcanzan las demandas sociales. Sin embargo, también se nutre del nuevo impulso de esta historia, como de los instrumentos de la sociología de las élites culturales de la cual se beneficia una historia intelectual que no quiere ser historia puramente intrínseca de las obras y los procesos ideológicos. En ese marco se inserta su capítulo sobre las estadísticas como esfuerzo metodológico para integrar lo individual y fragmentario en un todo que la sociedad puede analizar objetivamente como parte del proceso que emprende el Estado, que llaman *institution building*, y que se vincula con el tránsito que José Antonio Aguilar llama de la república epidérmica a la república sustancial, cuando esta se ve conminada a responder propositivamente sobre la compatibilidad entre las nociones de bien común, libertad e igualdad y las prácticas políticas que surgen de su acción.

El autor sitúa bien este momento con el surgimiento de la llamada cuestión social, la que, según él, “supuso una ruptura con una tradición individualista, ya que a partir de entonces se construyó un nuevo objeto de conocimiento: la sociedad”. En términos de paradigmas explicatorios, este proceso se vincula sin duda con el auge del positivismo; en términos económicos, debemos vincularlo con lo que James Morris, a quien Yáñez cita, llama las consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y urbanización nacientes. Sin embargo, en términos político-sociales y también culturales creo que debemos asociarlo con el tránsito del concepto de pueblo como entidad abstracta a su visibilización y corporización en el trabajador, el proletario y, en definitiva, el pobre. Esto, porque los campesinos abandonaron la tierra y desplegaron su miseria en el Santiago de la oligarquía. Para sorpresa de muchos, el obrero expresa reivindicaciones propias y reclama sus derechos de participación de los derechos de la república que ahora siente propia.

Como bien explica nuestro autor, ello tiene relación con el surgimiento de un movimiento popular-obrero, anclado en prácticas primero mutualistas y luego de resistencia, un Estado despreocupado de lo social, y una oligarquía que cree que la marginalidad puede acotarse con cordones de cintura en torno a su ciudad.

La autonomización de la esfera de influencia de los trabajadores, el avance de las ideas socialistas y la diferenciación ideológica expresada en las posturas de los partidos políticos no fue del todo ajena a la Guerra del Pacífico (1879-1884), que hizo aflorar, además de la polaridad entre lo nacional y lo continental, otras tensiones provenientes de su propio utillaje argumental contra Perú y Bolivia. Haber justificado su postura en la defensa de las asociaciones, del trabajo productivo del industrial y del peón chilenos y de la virtud frente a la corrupción extranjera situaba a la clase dirigente chilena ante un nuevo escenario y a un *fait accompli* del

que debía hacerse cargo. Si la nación había sacrificado a sus hombres para la gloria de sus miembros, si el republicanismo había sido un artefacto cultural útil para ganar una guerra en su nombre, se imponía ahora, como sostuvo el político chileno Isidoro Errázuriz, “la entrada de la República a la edad viril”¹.

En la discusión sobre el trabajo subyacía un problema que decía relación con la inclusión de todos los habitantes de la república en el imaginario nacional de la clase dirigente y su acceso a la ciudadanía activa. Para estos efectos, es conveniente la distinción que hace Samuel Finer entre Estado nacional y Estado-nación, siendo este último el que efectivamente se define en torno a su pertenencia al pueblo². El Estado-nación se basaría en ciertos principios que convierten a la nación en una asociación política de individuos libres reglada por la constitución y las leyes y basada en la vigencia de ciertos principios sociales y políticos: la nacionalidad debe ser la base de la organización territorial; la soberanía del pueblo debe ser un principio secular independiente de la dependencia de autoridades pre-existentes; la ciudadanía debe garantizar no solamente los derechos civiles y políticos, sino también los sociales y económicos, como la educación, el trabajo, el bienestar social y la salud.

Permítaseme, entonces, agregar a las sugerentes hipótesis de Juan Carlos Yáñez y a su completo y sugerente relato cronológico de la historia del trabajo y su institucionalización, una hipótesis complementaria. Creemos que desde el surgimiento de la llamada “cuestión social” la nación comienza a asumir una fisonomía moderna, a través del acceso a la opinión pública de nuevos actores e interlocutores con la oligarquía que buscan integrarse de pleno derecho tanto a la sociedad civil como política. Ello daría inicio a un proceso de tránsito desde la nación oligárquica o excluyente a la nación democrática o incluyente, lo cual implica, básicamente, la incorporación del mundo popular a los espacios sociales y políticos, y la actualización del principio de soberanía nacional en su acepción moderna³. Es la visibilización del problema de la modernidad política y de la sociedad plural que debe incluir al “otro”. Un “otro” que, además, ya había ingresado en la ciudad oligárquica, derribando sus puentes levadizos y asediando su fortaleza.

En un comienzo, los partidos políticos reconocieron apenas la existencia de un conflicto entre capital y trabajo o entre patrones y obreros; pocos percibieron que no bastaba con resolver problemas puntuales o avanzar con leyes proteccionistas. Sin embargo, a pesar de la carencia de formulaciones explícitas respecto de que el problema radicaba en una adecuación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil para dar cabida a una nación de ciudadanos, es posible detectar que en los inicios de la cuestión social ya se levantan voces que claman por ampliar la nación imaginada e incluir en ella a los excluidos. Luego de una ardua discusión, de la

¹ Carmen McEvoy, “República nacional o república continental? El discurso republicano durante la Guerra del Pacífico, 1879-1884”, en Carmen McEvoy y Ana María Stuenkel (editoras), *La República Peregrina: Hombres de armas y letras en América del Sur. 1800-1884*, Lima, IEP-EFEA, 2007.

² James Dunkerley (ed.), *Studies in the Formation of the Nation State in Latin America*, Londres, Institute of Latin American Studies, 2002.

³ También podría formularse como el tránsito de la “república oligárquica” a la “república del trabajo”.

radicalización de la lucha de clases, del surgimiento de antagonismos ideológicos irreconciliables, en la década de 1920 la fortaleza oligárquica mostró sus vulnerabilidades. Por la puerta ancha de las elecciones, el pueblo buscaría pasar de la potencia al acto; de la abstracción teórica al poder real.

El autor enfrenta este período haciendo aportes interesantes, especialmente al considerar las influencias corporativistas que se hicieron visibles desde que la democracia liberal del XIX hace aguas con la llegada de Arturo Alessandri al poder y su amistad con nuevos grupos que confirman el ingreso de la sociedad de masas al poder. Nuestro autor busca una interesante filiación originaria para este cambio cultural: el decreto de agosto del 1932 que reorganiza el Depto. de Biblioteca del Ministerio del Trabajo, denominándose ahora Depto. de Extensión Sociológica y Cultural, que asignaba a los funcionarios del Ministerio del Trabajo la misión de transformar estructuralmente la república; imagino que de constituir lo que luego llama la “república de los trabajadores”. Evidentemente este decreto nombra una nueva realidad, pero esta, creo, como todo cambio cultural que termine reflejándose en decisiones estatales, se viene gestando hace ya años. Y Yáñez no lo niega. De hecho, sostiene que el socialismo de la República Socialista representó a una clase media ilustrada que se venía formando en los últimos años de la República Parlamentaria.

Y aquí me voy a permitir agregar algunas opiniones a las del autor. Primero, respecto del rol de los católicos. Concuero con él que uno de los objetivos de la Iglesia Católica fue apoyar las asociaciones obreras a fin de evitar la propagación de ideologías contrarias al orden social. Aunque el autor reconoce que su acción fue antecedente de un pensamiento social cristiano, creo que hay que distinguir en este análisis las posturas del magisterio, de la de los católicos sociales que ya se pueden identificar a fines del XIX —pienso, por ejemplo, en Zorobabel Rodríguez—, los cuales comienzan a independizarse del magisterio en materias sociales, en su comprensión de la *Rerum Novarum* y para qué decir después de la *Quadragesimo Anno*. Si no, difícilmente podemos explicarnos, en primer lugar, la separación de *El Independiente* de *El Estandarte Católico*; y luego las motivaciones oscilantes que pueden identificarse en el catolicismo chileno. Por un lado, las de quienes entendían el compromiso social como un deber cristiano de facilitar la incorporación de todos los sectores de trabajadores a la dignidad de ciudadanos de pleno derecho, motivados por el reconocimiento de la situación de miseria y desprotección de los trabajadores. Ellos, consideraron su obligación el mejoramiento de las condiciones sociales y formularon un discurso donde prevalecían los conceptos de derechos sociales y políticos. Según este grupo, la responsabilidad por su resguardo correspondería a todos los actores sociales, incluyendo el Estado, y se abrieron a comprender el atractivo del liberalismo y del socialismo y, por lo tanto, a competirles en el terreno de sus reivindicaciones de libertad y participación. También buscaron la mejora en las condiciones de trabajo, el acceso a viviendas dignas, beneficios de salud y previsión y el establecimiento de asociaciones de socorros mutuos como deber de una sociedad cristiana, las cuales Yáñez describe en detalle. Por otra parte, efectivamente existían aquellos católicos que eran más reaccionarios a las presiones obreras y el temor hacia el socialismo y el comunismo y que no

necesariamente querían involucrarse en propuestas políticas. Opinaban que la superación de la pobreza no era un deber cívico de justicia que involucrara a los católicos, sino más bien un compromiso correspondiente al ámbito de la caridad cristiana. Solo un botón de muestra, el discurso de Rafael Luis Gumucio en la Convención Provincial del Partido de Valparaíso. En 1913 este afirmó: “Es preciso que marchemos junto con el pueblo, que sirvamos sus intereses, tomando la ofensiva contra los que [...] ahondan la crisis económica y encarecen la vida popular”⁴. Las posturas del padre Vives y luego del padre Hurtado confirman lo anterior.

Otro punto, tal vez menor: Juan Carlos Yáñez duda sobre la pertinencia de llamar “intelectuales” a los individuos que pensaron los problemas sociales en Chile a fines del XIX y comienzos del XX. Dice que más bien son abogados, profesores, periodistas, etc. Y prefiere llamarlos pensadores sociales. Esa es una discusión de larga data en la historia latinoamericana, y que llevó al norteamericano Allen Woll, en los 80, a considerar que, como además de hombres de pensamiento eran hombres de acción, y por lo tanto con intereses políticos, no correspondía asignarles la categoría de intelectuales. En el XIX, muchos historiadores prefirieron darles el nombre de “publicistas” en tanto forjadores de una opinión desde su posición pública. Lo anterior, para evitar críticas como las de Woll, quien supone que con el advenimiento de la modernidad, el intelectual, centrado en el saber, debe estar separado del poder para ejercer su rol en forma autónoma en ese espacio intermedio que define Habermas, donde los privados se reúnen libres de ataduras de dependencia para debatir lo público. Creo, siguiendo a Ángel Rama, que hacia comienzos del siglo XX los intelectuales adquieren cierta autonomía, lo que va de la mano con el auge de las profesiones liberales, y que ya hacia 1920 pueden participar en política en virtud de su alto espíritu crítico, derribando, de paso, lo que para Rama es la mítica y falsa imagen del escritor en su torre de marfil. Afirma que entre 1900 y 1930 los intelectuales ejercen una función ideologizante, conduciendo espiritualmente a la sociedad, lo que me parece que sucede crecientemente en, por ejemplo, el Chile del Centenario.

Por último, un punto sobre el corporativismo. Creo que desde el punto de vista de la construcción de la nación chilena, la “cuestión social” es un momento fundamental en la medida que, al plantear la relación entre empleadores y trabajadores o entre capital y trabajo, o entre pobres y ricos y entre caridad y justicia, está también planteando el tema de los derechos y remitiendo a los conceptos republicanos de igualdad y libertad. Es decir, está abriendo un nuevo momento en la discusión sobre los integrantes de la nación y las condiciones y privilegios de la ciudadanía. En ese sentido, me parece que no es el corporativismo el que hace sentir al pueblo, como afirma el autor, “parte integrante de la nación”, sino que es todo el proceso que se inicia con la presión de los trabajadores en la lucha de sus derechos y de la discusión que entabla la élite sobre los mismos, la que hace salir a la superficie un problema que tiene que ver con la actualización de la república y, en consecuencia, la actualización de la soberanía del pueblo moderno expresada en el ciudadano. El

⁴ R. L. Gumucio, *Rumbos del Partido Conservador. Discurso en la Convención Provincial de Valparaíso*, Santiago, Litrografía e Imprenta Moderna, 1913.

corporativismo ya había surgido en el discurso político con el mismo Alessandri (en su discurso a la Escuela de Caballería a fines de 1923 y en su ataque a la junta de 1924), en la misma junta del 24 y su crítica a los políticos y en los textos que convocan a la Asamblea Constituyente y, finalmente, también en los círculos católicos: el padre Guillermo Viviani en sus *Doctrinas Sociales*, de 1919, ya hablaba de la idea corporativa como ingrediente de la doctrina social-cristiana y de las “fuerzas vivas de la nación”. En el fondo, el corporativismo era funcional a la crítica a la oligarquía, al liberalismo decimonónico y al socialismo marxista y también en parte a recuperar el autoritarismo apelando al ideal político portaliano de fundación de este “ser nacional”, como lo haría Encina, por ejemplo.

Este último comentario no tiene otro fin que insistir en la importancia que tiene para la historia de Chile la cuestión social que sirve de punto de partida para la reflexión de Juan Carlos Yáñez y para el despliegue de varias posturas ideológicas rupturistas con la tradición política del XIX. Creo que para Chile es el momento en que surge “el nuevo espacio público”, como titula Daniel Innerarity en uno de sus últimos libros, donde la política se convierte en un asunto público que discute la noción de poder como mera dominación, que plantea la representación genuina de los ciudadanos de la nación, y que entiende la identidad nacional como un lugar de encuentro en personas iguales y libres en interacción. Es el momento en que la pluralidad propia de la modernidad realmente se hace presente en la política chilena.

Finalmente, parece oportuno destacar la organización de la obra, el despliegue del relato, y la disposición de las fuentes, todo lo cual contribuye a que el libro se lea con facilidad en medio de la complejidad de su presentación. En ese sentido, el libro es un servicio a la pedagogía.

ANA MARÍA STUVEN
Pontificia Universidad Católica de Chile